

Sven Schuster*

◉ Las políticas de la historia en Colombia: el primer gobierno del Frente Nacional y el “problema” de La Violencia (1958-1962)

Resumen: La guerra civil de los años cuarenta y cincuenta (“La Violencia”) representa la ruptura más dramática en la historia colombiana del siglo xx. Sin embargo, no ha dejado casi huellas en la memoria histórica del país. A continuación voy a aclarar si esto se debe a un “pacto de olvido” como sostienen algunos investigadores. Para ello mostraré la supresión oficialista de las voces críticas en la última fase de la guerra, es decir durante el primer gobierno del Frente Nacional (1958-1962).

Palabras claves: La Violencia; Frente Nacional; Memoria Histórica; Colombia; Siglo xx.

Abstract: The civil war of the 1940ies and 50ies, known as “La Violencia”, is considered to be the turning point in Colombia’s recent history. Nevertheless, it seems that the conflict didn’t have much impact on historical memory. In the following I will focus on the official suppression of critical voices in the aftermath of war. Therefore, my emphasis is on the first National Front government (1958-62).

Keywords: La Violencia; National Front; Historical Memory; 20th Century; Colombia.

Introducción

Colombia es un país “joven”, en el sentido de que la edad promedio de sus habitantes no sobrepasa los 27 años (la de Alemania es de 43 años).¹ No obstante, la distancia generacional entre la mayor parte de la población y quienes vivieron el período más oscuro del siglo xx, la época de La Violencia² (1946-1963), no explica lo suficiente por qué ese conflicto ha dejado tan pocas huellas en la memoria histórica de la nación. Como indican los estudios en el campo de la historia oral (véanse p. ej. Blair Trujillo *et al.* 2003; Gómez Cardona 2003), sí existe, no obstante, lo que algunos llaman la “memoria comunicativa”

* *Sven Schuster es doctor en Historia de América Latina y colaborador científico en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt (Alemania). Ha publicado varios ensayos y dos monografías sobre temas colombianos. Actualmente trabaja sobre la representación de los países latinoamericanos en las ferias mundiales del siglo xix y principios del xx. Contacto: s.schuster@ku-eichstaett.de.*

¹ Según datos del *CIA World Factbook*: <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>> (19/03/2009).

² Bajo el término “La Violencia”, escrito en mayúsculas, los colombianos se refieren a la guerra civil de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo.

(Assmann/Frevert 1999), es decir, aquella que se limita a grupos sociales bien definidos, muchas veces basada en la narración oral o en experiencias directas, y que generalmente no perdura más de dos generaciones. Son las voces de quienes presenciaron el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá, la consiguiente lucha entre conservadores y liberales (1949-1953), la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1954-57) y, finalmente, el nacimiento de nuevos grupos guerrilleros de carácter “comunista”.

La actual lucha de la guerrilla izquierdista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la cual nació en la última fase de La Violencia (1964) y que sirve de legitimación para la creciente militarización del país, representa la única conexión directa con aquella época. Sin embargo, con la excepción de algunos análisis generales sobre la enseñanza de la historia en las escuelas, no existen encuestas representativas acerca de la conciencia histórica de los colombianos. Al parecer, los alumnos saben que Gaitán fue asesinado en 1948, que las FARC ya llevan más de cuarenta años luchando contra el Estado o que fenómenos tan preocupantes como el paramilitarismo y la “parapolítica” de hoy tienen sus precedentes en los años cincuenta, tal vez con la sola diferencia que los llamados “chulavitas” y “pájaros” de entonces no hicieron uso de la moto-sierra para asesinar a sus víctimas.³ Pero, a la hora de detectar las raíces del conflicto actual, hay una gran confusión y pocas respuestas. En los medios masivos, los manuales escolares y el espacio público en general, el tema de La Violencia casi no existe.

A mi juicio, la ausencia del tema en la agenda pública tiene su origen en los primeros años del gobierno del Frente Nacional que se instaló después de la dictadura militar de Rojas Pinilla. En las siguientes líneas voy a mostrar cómo las élites políticas de la época manejaron el tema de La Violencia y cuáles han sido los efectos para la memoria histórica del país, es decir en la esfera institucional y pública. Analizaré la posición oficialista como se manifiesta en la así llamada “gran prensa”, los debates parlamentarios, la historiografía, los manuales escolares, así como las leyes de amnistía y las Comisiones de la Violencia.⁴ Al igual que Marco Palacios, parto de la idea de que las imágenes básicas que todavía ordenan nuestras concepciones sobre La Violencia se forjaron en aquellos años (Palacios 2003: 191).

Aceptando la idea de un “pacto de olvido” –expresión adoptada por el periodista y escritor Antonio Caballero (Caballero 1986: 7 ss.)– se pueden formular las siguientes preguntas respecto a la no-representación de La Violencia en el imaginario colectivo: ¿Cómo pudo tener un conflicto tan devastador y sangriento un impacto tan limitado en la opinión pública? ¿Dónde está el lugar de La Violencia en la memoria histórica? ¿Dónde se encuentran los monumentos que recuerdan a las víctimas, a los soldados y a los guerrilleros? ¿Por qué la responsabilidad histórica de las élites no forma parte del discurso

³ Para algunas evaluaciones generales sobre la enseñanza de la historia en Colombia véanse: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85744_archivo_doc.doc>; <http://menweb.mineducacion.gov.co:8080/saber/estandares_ciencias.pdf>; <http://menweb.mineducacion.gov.co:8080/saber/analisis_preguntas_sociales_2005-2006.pdf> (19/03/2009).

⁴ Forman parte de la “gran prensa” los cuatro periódicos tradicionales con más tiraje: *El Tiempo* (1911), *El Espectador* (1887), *La República* (1954) y *El Siglo* (1936). Otras fuentes aquí analizadas incluyen los *Anales del Congreso* (AdC), decretos presidenciales, manuales escolares, así como la historiografía vieja sobre La Violencia.

histórico dominante como es difundido por los medios masivos, los museos o los libros de texto? ¿Acaso es un pecado admitir que ciertas figuras públicas del pasado permitieron y estimularon la eliminación de miles de campesinos, tildándolos de “comunistas”, “ateos” y “masones”?

De La Violencia al Frente Nacional

Aunque no haya un consenso definitivo acerca de la periodización de la época de La Violencia, la mayoría de los historiadores coincide en limitarla al período comprendido entre 1946 y 1964. Pese a que la peculiar denominación insinúa de alguna manera una etapa histórica homogénea y bien limitada, no es ése el caso. Al contrario, hoy en día se diferencian por lo menos tres fases de La Violencia. La primera está representada por la lucha partidista de los años cuarenta, la cual culmina en el asesinato del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán y la consiguiente destrucción de Bogotá el 9 de abril de 1948. Hacia los años cincuenta se transforma en un segundo período caracterizado por un conflicto predominantemente económico y despolitizado. Fue sólo después de la caída de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-57) y la instauración del Frente Nacional (1958) cuando cesaron las hostilidades bipartidistas. La tercera etapa se inicia a principios de los años sesenta y está marcada por la actividad de los “bandoleros” (Sánchez/Meertens 1983).

Durante el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) los bandoleros fueron vistos como los principales enemigos del Estado. Pusieron en peligro la estabilidad del nuevo sistema político, basado en la paridad entre liberales y conservadores en la ocupación de los distintos cargos de la administración pública y en el compromiso de alternar la presidencia a lo largo de dieciséis años. Aunque no es claro hasta qué punto el exclusivismo político del Frente Nacional contribuyó al auge del bandolerismo, muchos investigadores relacionan esa última fase de La Violencia con el conflicto armado actual (p. ej. Pécaut 2003: 45-49; Uribe 2004: 43-52). Señalan que los líderes del Frente Nacional, a través de una amplia amnistía, lograron la desmovilización de la mayoría de los bandoleros. Por otra parte, algunos enclaves rurales de filiación marxista –las llamadas “repúblicas independientes” o autodefensas campesinas– se resistieron y fueron combatidos militarmente. Finalmente, el bombardeo de Marquetalia en mayo del 1964 y la consiguiente formación de las FARC marcaron el fin de la época de La Violencia como momento “histórico” y, al mismo tiempo, el inicio del complejo entramado de las múltiples violencias actuales.

No obstante, considerando las más de 200.000 víctimas, los millones de refugiados y los incalculables daños materiales que dejó La Violencia, es extraño que la época no haya recibido la atención debida por parte de las élites políticas. Aunque la mayoría de los historiadores ve en ella la ruptura más dramática en la historia colombiana del siglo XX, no fue reconocida como tal por las oligarquías de la época. Aparentemente los líderes del Frente Nacional no veían con claridad que un acuerdo entre las dos entidades políticas tradicionales –vistas como “naturales”– no era la medida apropiada para poner fin a la matanza. No comprendían que los grupos armados ya no luchaban por el directorio de algún partido sino por la propiedad de tierras o contra el gobierno. Políticos como Alberto Lleras creían que era suficiente fortalecer las instituciones del Estado y convocar

elecciones para alcanzar la paz. Como la guerra había empezado a raíz de diferencias políticas, podía también, en teoría, finalizarse mediante un acuerdo político.

Ignorando por completo el carácter económico, social y revolucionario de la “nueva” violencia, las élites prefirieron hacer caso omiso del pasado sangriento. Así, como indica Darío Acevedo Carmona, ya el documento fundacional del Frente Nacional, el Tratado de Benidorm, fue concebido como un “pacto de olvido” por sus artífices Laureano Gómez y Alberto Lleras (Acevedo Carmona 2003: 229-236). Incluso, puede verse aquí un antecedente de lo que pasaría dieciocho años más tarde en España después de la muerte de Franco, cuando de nuevo se impondría un “pacto de silencio” entre las élites para no poner en peligro el proceso de transición. De todos modos, como demuestran los debates y sucesos de los últimos años, la historia de la Guerra Civil española no se ha podido “sepultar” tan fácilmente (Aguilar Fernández 1996 y Bernecker/Brinkmann 2006). En la península, la lucha por el sentido de la historia apenas ha comenzado.

En el caso colombiano, la retórica política en los primeros años del Frente Nacional giraba alrededor de tres elementos discursivos: paz, reconciliación y olvido. Los líderes políticos subrayaron la importancia de olvidar el pasado, “por el bien de todos”, a través de numerosos debates parlamentarios, de la prensa y de eventos públicos. Según los portavoces del bipartidismo el olvido colectivo habría servido de “antídoto” contra el “cáncer” de La Violencia, o como rezaba un editorial de *El Independiente*: “esperamos confiadamente que las altas fuerzas morales del país reaccionen con la urgencia necesaria para eliminar con medios razonables y justos el cáncer que continúa minando la salud de la república”.⁵

El Frente Nacional, ¿un pacto de olvido?

Teniendo en cuenta el alto nivel académico de los estudios sobre La Violencia –que, en su mayoría, están lejos de omitir la responsabilidad histórica de las clases dirigentes– es difícil de comprender por qué la conexión entre la investigación y la esfera pública es tan débil. Mientras en algunos países europeos y latinoamericanos, el pasado violento ha contribuido no sólo a la producción de una vasta literatura científica, sino también a la formación de un discurso histórico ampliamente aceptado, en Colombia la época de La Violencia se presta a muy diversas interpretaciones, muchas veces sin argumentos sólidos. Hoy en día ya no es tan fácil poner en duda públicamente puntos como el carácter autoritario e inhumano de las dictaduras militares del Cono Sur o la naturaleza racista del antiguo régimen de Sudáfrica; ni hablar del discurso cuasi oficial sobre el Holocausto en Alemania. Pero ¿qué sucede en Colombia? Atrapados en un conflicto que no parece tener inicio ni fin, la mayoría de la población ha perdido todo sentido de su historicidad. Se ha impuesto un relato totalizante y ahistórico del pasado, en el cual La Violencia aparece como un episodio indefinido dentro de una serie de desastres. En este sentido, se trata de un pasado que no pasa. Tal vez es por eso que las élites de hoy se dejan impresionar tan poco por los resultados de la investigación histórica y siguen negando que sus antecesores fueran los principales responsables del conflicto.

⁵ *El Independiente*, 31 de marzo de 1958. Debido a la censura bajo la dictadura de Rojas Pinilla, el periódico *El Espectador* apareció como *El Independiente* hasta mayo de 1958.

¿Cómo se explica este hecho? Sostengo que la memoria histórica de La Violencia es aún muy fragmentaria y está lejos de representar un discurso coherente. A excepción de algunas comisiones poco exitosas, no ha habido hasta ahora ningún intento de institucionalizar la recuperación del pasado violento. Refiriéndose a esta situación, Gonzalo Sánchez habla acertadamente de “memoria prohibida” (Sánchez 2006: 83). No obstante, tampoco se puede omitir la existencia de diversos actores sociales que lucharon por una versión crítica y multidimensional de la historia. A lo mejor, algún día, estas voces en su conjunto formarán un discurso histórico capaz de romper con el pacto de olvido impuesto “desde arriba”. Por el momento hay que constatar que las voces subalternas están lejos de expresarse por medio de canales institucionales, lo cual tiene mucho que ver con la debilidad crónica de la sociedad civil en Colombia. Debido a un ambiente de violencia y amenazas no se ha podido desarrollar un discurso crítico alternativo. Es por eso que la “contra-memoria” se limita a algunas representaciones particulares, en su mayoría también elitistas, como por ejemplo en las esferas del arte, la literatura, el cine o el teatro.

Apoyándome en el concepto alemán de *Geschichtspolitik*, traducido libremente como “políticas de la historia”, trataré de reconstruir el discurso político de las élites acerca de La Violencia. El historiador creador del concepto, Edgar Wolfrum, decidió centrar sus investigaciones en la mentalidad de las élites políticas para entender cómo podían desarrollarse memorias históricas tan distintas en las dos Alemanias de la Guerra Fría (Wolfrum 1999). Mientras que la mayoría de los investigadores interesados en el estudio de la memoria se ha concentrado en el poder discursivo de la historiografía, cuya fuerza supuestamente consiste en servir de base para las oraciones políticas, los libros de texto, las exposiciones en los museos o la difusión del relato histórico por los medios masivos, Wolfrum subraya la relativa autonomía del discurso político. Según él, en una sociedad moderna son ante todo los políticos, periodistas y las figuras públicas en general quienes moldean el discurso histórico dominante y no necesariamente los historiadores. Es más, para ejercer el poder político, el uso de la historia como fuente de legitimidad se vuelve esencial. No pocas veces las élites se encuentran así en un conflicto con la visión objetivadora de la historiografía académica. Dependiendo de la fuerza de la última, las dos esferas están en una lucha permanente por el derecho a la interpretación.

En este sentido, *Geschichtspolitik* se refiere al campo en el cual diferentes protagonistas, como por ejemplo políticos, periodistas, intelectuales o investigadores, tratan de establecer un discurso histórico hegemónico. En manos de las élites políticas la historia es utilizada para legitimar, movilizar, politizar, escandalizar o difamar. Para el análisis del discurso hay que diferenciar las cuatro dimensiones del concepto de Wolfrum. Se trata, en primer lugar, de un campo de acción, en el cual los intereses particulares de los diversos protagonistas definen el tratamiento del pasado. La lucha de las élites por la aceptación pública de sus relatos muestra a la vez una amplia gama de interdependencias entre los campos de la política, la opinión académica y la pública. Segundo, se trata de una tarea pedagógica, la cual puede solucionarse en el sentido crítico-racional, pero también de manera regresiva y legitimadora. En tercer lugar, este discurso siempre se desarrolla en un ambiente de permanente tensión entre la ciencia y la política, resultado de la reclamación de una “objetividad relativa” por parte de la mayoría de los investigadores. Y, finalmente, a diferencia del concepto llamado *Vergangenheitspolitik*, traducido libremente como “políticas del pasado”, la *Geschichtspolitik* no se limita solamente a la superación de un viejo sistema, por ejemplo autoritario o dictatorial. Incluyendo la esfera de

las “políticas del pasado”, *Geschichtspolitik* también se refiere a las implicaciones prácticas de un proceso de transición democrática, como por ejemplo la indemnización de las víctimas, el juicio de los victimarios o la instalación de Comisiones de la Verdad.

A pesar de algunas limitaciones conceptuales, como por ejemplo la postulación de un dualismo esquemático entre el sector académico y el uso manipulador de la historia por la política, el concepto desarrollado por Wolfrum se destaca por su gran valor heurístico. Para desenlazar la construcción de una memoria dominante es indispensable el análisis de la prensa, los debates parlamentarios, la historiografía y los libros de texto. Además, en el caso colombiano, hay que fijarse en el papel de las amnistías y de las llamadas Comisiones de la Violencia.

El “problema” de La Violencia en la prensa y los debates parlamentarios

Una revisión sistemática de los editoriales y columnas de *El Espectador*, *El Tiempo*, *La República* y *El Siglo* desde mayo del 1957 hasta finales del 1962, muestra cómo las élites se aprovecharon de sus estrechos vínculos con la gran prensa para difundir sus interpretaciones acerca de la Violencia.

El análisis de la prensa permite identificar algunas tendencias generales. Resulta claro que el discurso más importante, por lo menos en el sentido cuantitativo, fue el de “perdón y olvido”. Desde el inicio del Frente Nacional, los líderes de ambos partidos difundieron su visión del pasado por todos los medios masivos. El lema más repetido en esa fase fue la famosa tríada de “paz, reconciliación y olvido”, con fuerte énfasis en la última reclamación, o como lo formula un editorial de *La República*:

Nada justifica hoy la violencia, sobre la cual sólo florecen el despotismo y la anarquía. El acuerdo de las dos colectividades históricas se ha hecho sobre la base de un total olvido del pasado a base de la condenación implacable del bandolerismo y del delito. La venganza y la retaliación harán de Colombia un vasto cementerio, un campo de desolación y de ruina (*La República*, 29 de septiembre de 1957).

De todos modos, al inicio de los años sesenta ya se comienzan a oír las primeras voces de protesta contra la visión conciliadora y encubridora del Frente Nacional, cuyo fundamento ideológico está basado en un pacto tácito entre las élites para no permitir discusiones sobre un pasado “problemático”. Mientras tanto, muchos de los responsables de La Violencia volvieron a ocupar cargos importantes en el nuevo gobierno. La continuidad personal del Frente Nacional fue tan abrumadora que una discusión abierta sobre las actuaciones individuales durante La Violencia habría puesto en peligro la estabilidad del sistema mismo. No obstante, algunos grupos de la izquierda, como por ejemplo el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), así como un pequeño círculo de intelectuales, cuestionaron públicamente el tratamiento de la historia llevado adelante por la sección dirigente del Frente Nacional. Un buen ejemplo de resistencia al discurso oficial representa el periodista y novelista Eduardo Caballero Calderón, autor de *El Cristo de espaldas* (1952), uno de los textos más leídos sobre La Violencia. En una columna de *El Tiempo* analiza con claridad los errores del Frente Nacional y critica los conceptos paternalistas de sus artífices. Según él, los sucesos sangrientos del 9 de abril representaban la

reacción explicable de las masas oprimidas, la consecuencia lógica e inevitable de una política excluyente:

Mal educado el pueblo colombiano por un Estado inepto y arbitrario, que ha sido siempre extraño y hostil a la nación; concebido el Estado como una presa por los partidos; sin que la doctrina cristiana haya servido para morigerar las costumbres de los ciudadanos, para civilizarlos, para darles una conciencia del bien y del mal: era de presumir que el día en que ese pueblo reaccionara lo haría en forma salvaje y violenta. Se tuvo una primera muestra de lo que eran esas reacciones populares colombianas, verdaderamente sin Dios ni ley, cuando el 9 de abril se rompieron las esclusas y sobre el pueblo no pudo nada la acción de un Estado desacreditado e incompetente, ni le sirvió de freno una tradición religiosa y cristiana tan endeble que se le había olvidado (*El Tiempo*, 8 de febrero de 1960).

Sin embargo, voces como estas eran muy escasas en los primeros años del Frente Nacional. Un análisis cuantitativo de la gran prensa muestra que entre mayo del 57 y finales del 62 sólo hubo un total de 20 contra-vozes explícitas, mientras que los editoriales y columnas a favor de la política de paz, reconciliación y olvido sumaban más de 200.

Algo similar sucedió en el Congreso de la República donde se dieron casi a diario debates sobre La Violencia entre los años 1957 y 1962. Muy pocas veces se hablaba de las causas del conflicto, sino más bien de las posibles medidas para acabar con él. Estas propuestas incluyeron por ejemplo leyes de amnistía y las llamadas Comisiones de la Violencia, a cuyo impacto me voy a referir más adelante. En general, predominó la tendencia a mostrar La Violencia como algo “ajeno” y “bárbaro”, por lo cual muchos congresistas subrayaron que provenían de regiones “civilizadas” donde no se conocía tal fenómeno, como muestra por ejemplo un comentario de Absalón Fernández de Soto, gobernador del Valle del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la guerra y tierra natal de los temidos “pájaros”:

Lo único que actualmente solicitan todos los municipios del Departamento en esa materia, es que no los incluyan en el grupo de las regiones bárbaras [...] La violencia fue una imposición venida de zonas altas, e inclusive para ejecutarla se importaron criminales de otras regiones, pues nosotros somos y seguiremos siendo un pueblo pacífico y tranquilo (AdC 1959, N° 58: 660).

Se puede constatar que los diputados y senadores de los partidos tradicionales no tenían muchas ganas de “revivir” el pasado sangriento, en el cual algunos de ellos habían jugado un papel bastante negativo. En este sentido, les parecía oportuno evitar cualquier comentario sobre La Violencia. Sólo muy de vez en cuando hablaron en público sobre las consecuencias de la catástrofe, como por ejemplo a raíz de la publicación del libro ya clásico *La Violencia en Colombia* de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna (Guzmán Campos *et al.* 1962/64), el primer estudio académico acerca de las causas del conflicto.

Sin embargo, como ilustran las reacciones de la mayoría de los parlamentarios, casi no se discutía sobre el contenido del libro, el cual sirvió ante todo como un “arma política”. Un buen ejemplo de estas batallas nos da la discusión sobre el papel del político vallecaucano Gustavo Salazar García, a quien se acusaba de haber estado implicado en diversos crímenes durante La Violencia. Representantes del Partido Liberal y del MRL

lo acusaron en el Congreso de haber colaborado con el jefe de los “pájaros” del norte del Valle, el tristemente célebre León María Lozano, alias “El Cóndor”. En éste y en otros debates, *La Violencia en Colombia* fue usada para denunciar al enemigo político sin discutir en ningún momento sobre su contenido, como muestra la respuesta de Salazar García a sus adversarios:

Esta mañana, el Representante Ibarra tuvo la gentileza de mostrarme una especie de Biblia que se trajo ayer aquí, y en la cual se hace una alusión a mi nombre. Creí que se trataba de una investigación seria, que al fin escribir sobre la violencia en Colombia no era un negocio de gentes que borronean papel y hacen trabajar las imprentas dizque explicando los antecedentes de la violencia, y resulta a la postre que están haciendo simplemente un negocio que yo considero más indigno, deshonorables y mezquinos que el que utilizan para ganarse la vida y conseguir el dinero las cortesanas de que sabemos (AdC 1962, N° 65: 859).

A largo plazo los principales resultados de la obra de Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda presentaron la falsedad del discurso oficial a un gran público. Sin embargo, no fue el principio de un “aprendizaje político” amplio, como lo habían esperado sus autores. Así, con motivo de la publicación del segundo tomo en 1964, Fals Borda escribe ya con cierta resignación:

Desgraciadamente, una vez amainada la tormenta político-literaria, luego de haberse proclamado otra vez lo demoníaco de la violencia, el país pareció volver a su nerviosa indiferencia respecto al más grave problema. Aunque en aparente retirada, la violencia sigue siendo cosa común, a la que los colombianos habremos de acostumbrarnos, creando personas abúlicas y muertas en vida en las regiones donde reina; y gentes egoístas, apáticas y miopes en las ciudades donde se creen lejos del flagelo (Guzmán Campos *et al.* 1964: 14).

Aparte de la tendencia claramente identificable de llamar al olvido, también había quienes preferían una versión apologética de la historia. Aunque Alberto Lleras y sus seguidores habían exigido no profundizar en el tema de La Violencia, algunos grupos dentro de las élites estaban ansiosos de encontrar “culpables”. Los hallaron, por supuesto, fuera de la clase política. En esta tarea de falsificación de la historia se destacaron sobre todo políticos conservadores, quienes alegaron la supuesta “barbaridad” y la falta de “cultura” de las masas populares como principales causantes de La Violencia. Así, sin diferenciar, crearon la imagen, muchas veces racista, de un “pueblo degenerado y mil veces tarado” como afirmaba otro editorial de *La República*:

Nunca pudiera uno imaginarse que en el pueblo existiera tal capacidad delictiva en estado latente, porque sólo en un medio corrompido, sin educación, sin cultura religiosa, sin moral, degenerado y mil veces tarado, pueden registrarse actos de tanta barbarie y crueldad como el vil y mil veces execrable asesinato de Gaitán, y la destrucción de Bogotá (*La República*, 8 de octubre de 1957).

El contexto socioeconómico de la época fue raras veces tratado por los periodistas y columnistas de la gran prensa. En vez de hablar sobre los permanentes fracasos de la élite en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, su oposición a una verdadera reforma agraria, la no aceptación de la función social de la propiedad o la persistencia

del clientelismo, impulsaron debates superficiales sobre la reintroducción de la pena capital o las diversas explicaciones etno-culturales de La Violencia. Además del “oscuro e inepto vulgo” (Cf. *El Siglo*, 21 de marzo de 1953), como decía el jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, cuando se refería al pueblo, las élites también identificaron a dos figuras históricas como instigadores de La Violencia: Gustavo Rojas Pinilla y Fidel Castro. Poco después de la caída del “jefe supremo” los medios informaron con gran satisfacción que Rojas Pinilla había sido el principal responsable de La Violencia. Según *El Siglo*, periódico de propiedad de Gómez, el ex presidente conservador no hizo otra cosa que combatir la “tiranía”:

El cuadro desolador que presenta la República, es obra directa, casi exclusiva de la plaga trecejunista que asoló los contornos colombianos. Hoy la vemos que se retuerce soberbia y orgullosa en los estertores de la muerte frente a la presencia portentosa de un hombre, cuyo mayor orgullo es haber mantenido incontaminado a un pueblo, a esos viejos soldados de la causa firmes y seguros en la resistencia contra la tiranía (*El Siglo*, 13 de junio de 1958).

Aquel discurso sólo fue igualado por el no menos falso sobre la participación activa de agentes comunistas en la primera fase de La Violencia. Según esta versión, especialmente popular después del 1959, año de la revolución cubana, fueron comunistas procedentes de La Habana y de Moscú quienes instigaron La Violencia, desde el Bogotazo hasta el bandolerismo:

[Castro] detenta el gobierno de la isla antillana, donde ha establecido la tiranía más sangrienta de la historia humana. Desde allí exporta revoluciones a toda América, inclusive a nuestra patria que recibió su primer zarpazo el 9 de abril de 1948 cuando contribuyó a los incendios y ‘hasta mató un cura’, según la conocida frase (*La República*, 25 de febrero de 1961).

Una buena muestra de la actualidad de esta versión ya “clásica” entre los sectores más conservadores de la élite nos da el ex ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, en una columna de *El Tiempo* del año 2006:

Y los colombianos, por lo menos los que no perdimos enteramente la memoria, [a Castro] lo recordaremos como la mayor de nuestras pesadillas. Desde cuando siendo un mozalbete vino a desencadenar y a dirigir los días horrendos de abril de 1948, que nos condenaron a años de violencia y a trescientos mil víctimas que ardieron en la pira levantada con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (*El Tiempo*, 2 de agosto de 2006).

Historiografía y manuales escolares

En los primeros años del Frente Nacional no sólo predominaba la negación de La Violencia en el ámbito político, sino también en las universidades y las escuelas. Al mismo tiempo que el gobierno prefirió hablar del “posconflicto”, a sabiendas de que la guerra no se había acabado, muy pocos académicos se atrevieron a impugnar esta posición. La falta de voces críticas en esa época se explica por el mal estado del sistema escolar y universitario en general, cuya financiación estaba siempre al borde del colapso. No había casi bibliotecas y los pocos archivos existentes, incluyendo el Archivo

Nacional, no eran precisamente instituciones profesionales ni estaban sistemáticamente organizadas, a diferencia de hoy en día. En este contexto, el gobierno no sólo mostraba un desinterés total en la conservación de los documentos de la época; también hizo lo suyo para hacer desaparecer los últimos restos de la gran “vergüenza” que era para él La Violencia. Así, como indica Gonzalo Sánchez, fueron destruidos en 1967 muchos documentos importantísimos de los años 1949 a 1959 en el Archivo Nacional por parte de funcionarios del ministerio de Gobierno, oficialmente por el “mal olor” de los expedientes y el “mal estado” de la institución en general. Que se declararan justamente aquellos documentos sobre la fase más sangrienta de La Violencia como “archivo muerto” tiene, a mi modo de ver, una explicación obvia: no se trataba de eliminar el “mal olor” de unos papeles, sino más bien el “mal olor” de toda una época, llena de “problemas” en la perspectiva de las élites tradicionales. Por eso decidieron borrar esa época de la memoria histórica de la nación, representada por el archivo (Sánchez 1988).

Al paso que se fue derrumbando el sistema escolar y universitario en los años cuarenta y cincuenta, ganó fuerza la historiografía oficialista. Mientras en las universidades ni siquiera existía la materia de Historia, los miembros de la conservadora Academia Colombiana de la Historia velaban sobre la enseñanza pública y la investigación. Creada en los años del doble trauma de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la separación de Panamá (1903), la Academia había adoptado la “misión” de trabajar en adelante para la unidad del país y la construcción de la nación por medio de la historiografía. La simbiosis entre la esfera de la política y el oficio del historiador era total, ya que la mayoría de sus miembros se destacaron como políticos o figuras públicas. Por eso prefirieron escribir una historia basada en los grandes logros de sus propios antepasados, cuyas hazañas generalmente habían tenido lugar en el “glorioso” siglo XIX (König 1994). De esta manera, quedó excluida la categoría de “historia contemporánea”, como demuestra también un decreto ministerial del año 1948. Expedido poco después de los sucesos “barbáricos” e “inexplicables” del 9 de abril, pone de manifiesto qué se entendía bajo el término “Historia Patria” y como ésta sería impartida en las escuelas:

Que el conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la veneración por los símbolos de la nacionalidad son elementos inapreciables de fuerza social, de cohesión nacional y de dignidad ciudadana;

Que la educación debe tener una función eminentemente social, y todas las materias de los pênsumes y programas escolares deben estar orientadas a formar en las nuevas generaciones hábitos democráticos, de decoro personal y de orgullo nacional;

Que los graves acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos han agitado a la República y han puesto de manifiesto, una vez más, y con caracteres de gran apremio, que el estudio concienzudo de la Historia Patria y la práctica de las virtudes cívicas por todos los hijos de Colombia debe ser preocupación permanente y desveladora del Gobierno (Decreto 2388, 15 de julio de 1948, en: Ministerio de Educación 1949: 6).

Se trataba de una visión paternalista y conservadora, en la cual las “masas” eran vistas como un mero objeto sin potencial de cambio alguno, o en palabras del presidente Alberto Lleras: “Las grandes revueltas del espíritu colombiano han venido, casi sin excepción, de arriba hacia abajo, del poder hacia el pueblo, y se escriben primero en las leyes como un estímulo para que prendan en el corazón de las masas [...]” (Lleras 1960: 101).

Para la enseñanza de la Historia Patria en las escuelas, se utilizó durante mucho tiempo, en algunos casos incluso hasta los años ochenta, la clásica obra de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, *Historia de Colombia*. Originalmente, ésta ni siquiera había sido escrita para la escuela, pues era el producto de un concurso abierto del año 1910 (fecha del primer Centenario). Por lo tanto, el enfoque del libro estaba en el período de 1810 a 1830, es decir los años “heroicos” de la república. Con el tiempo se publicaron numerosas ediciones ampliadas, algunas especialmente para la enseñanza pública, así por ejemplo la de 1967 para el uso en escuelas secundarias. Como se podrá apreciar, las “ampliaciones” consistían en realidad de breves enumeraciones de hechos. La historia contemporánea era tratada de una manera acrítica y muy superficial. Así, por ejemplo, la época de La Violencia ni siquiera aparecía bajo este nombre. En lugar de esto, los autores nos informan sobre el papel “pacificador” de dos de los arquitectos más importantes del Frente Nacional, Alberto Lleras y Laureano Gómez (1950/51), sin mencionar –obviamente– que el mayor número de muertos de La Violencia se contó durante el corto gobierno del último personaje. En el único párrafo que hace mención del conflicto, la culpa es de los “comunistas”. Dice: “En algunos sectores de la República se habían presentado ya casos de violencia, saqueos, pillaje y asesinatos, consecuencia todos ellos de la agitación política, de la oposición tenaz a las medidas del Gobierno y de los manejos del comunismo” (Henao/Arrubla 1967: 933)

Es sólo a partir de los años sesenta cuando se observa en el mundo académico un tratamiento mucho más profundo del tema. Mientras que la historiografía oficialista, simbolizada por la obra de Henao y Arrubla, pierde importancia, ganan terreno los académicos de tendencia marxista. Al comienzo de esa década se publican los primeros estudios que contienen una crítica explícita al comportamiento de las élites durante La Violencia. Todavía de una manera muy esquemática, incluyendo la inevitable retórica de la lucha de clases, estos trabajos representan el comienzo de la historiografía contemporánea en Colombia. Aunque los historiadores marxistas no hayan ejercido mucha influencia sobre el discurso político, ni sobre la enseñanza de la historia en los colegios, la cual seguía en manos de la Academia, sí contribuyeron a un cambio profundo en las universidades. Después de esa ruptura, cada vez más investigadores se interesaron por las manifestaciones culturales y regionales de La Violencia, alejándose gradualmente del marxismo dogmático.

Con el nacimiento de la llamada Nueva Historia hacia finales de los años setenta, los resultados de la investigación histórica empezaron a aparecer en los manuales escolares. Hoy en día, los libros de texto más actuales presentan La Violencia como un conflicto multidimensional, dentro de su contexto histórico y con protagonistas concretos. Lo que todavía no suelen mencionar es la responsabilidad explícita de algunos miembros de la clase dominante. Además, figuras como Jorge Eliécer Gaitán o Alberto Lleras todavía son mitificadas (véase p. ej. Gómez de Baruffol 1999; Lavacude Parra 1999; Melo/Díaz Rivero 1989; Samacá Prieto 2000; Vargas Poo *et al.* 2001). Así, por ejemplo, una figura notoria como Laureano Gómez es presentada de una manera muy poco crítica en muchos textos escolares, en este caso como “abogado de paz”:

El 7 de agosto de 1950 se posesionó como presidente de la república. A pesar de que sólo gobernó algo más de un año, hasta el 5 de noviembre de 1951, adelantó una importante gestión en obras públicas y campañas de salud. Posteriormente jugó un papel muy importante en

la pacificación del país, creando, con la participación de los líderes liberales, el Frente Nacional (Gómez de Baruffol 1999: 72).

Finalmente, hay que añadir que la enseñanza de la historia en las escuelas carece cada vez más de importancia. Aunque los libros de texto se han vuelto más críticos desde la mitad de los años ochenta, hoy en día se imparte cada vez menos historia en las aulas y, además, la materia ha sido fusionada con ciencias sociales y geografía (Sociales). Es difícil estimar lo que esto significa a largo plazo para la consciencia histórica de los colombianos.

Comisiones de La Violencia y leyes de amnistía

Aparte de las fuentes mencionadas hasta ahora, es decir la prensa, los debates parlamentarios, la historiografía y los manuales escolares, se podrían analizar otras más, como por ejemplo museos o monumentos. Sin embargo, debido al espacio limitado de este artículo, quisiera enfocarme brevemente en un ámbito relativamente poco investigado hasta ahora: las Comisiones de la Violencia y las amnistías.

Como ya dije, al inicio del Frente Nacional existía un consenso amplio acerca de la interpretación de La Violencia. Los dos partidos tradicionales estaban de acuerdo en que la “pacificación” del país sólo era posible mediante “perdón y olvido”. Para lograr tal fin, no era necesario elaborar leyes específicas para “dominar” el pasado. En lugar de esto, los líderes del Frente Nacional hicieron uso de los medios de comunicación, de oraciones públicas y directivas internas para moldear el discurso político, como se manifiesta de manera ejemplar en la prensa o en los debates parlamentarios. Como los medios masivos más importantes se encontraban en manos de pocas familias selectas, las élites no se veían obligadas a emitir una “ley de punto final”.

Aparte de estas medidas más bien intuitivas y descentralizadas, también se aplicaron unas “estrategias del olvido” más directas, es decir estatales. Aunque el gobierno no se atrevió a crear un “ministerio del olvido”, se ofrecían ciertos instrumentos para lograr el objetivo deseado: borrar de la memoria la época de La Violencia, sus causas y sus consecuencias. Las herramientas más importantes eran la creación de las Comisiones de Rehabilitación y de Investigación, así como las leyes de amnistía. Aunque ambas medidas tenían oficialmente un carácter “humanitario” y “pacificador”, servían en primer lugar para legitimar el Frente Nacional y para deshacer la culpa histórica de la clase política.

En los primeros tres años del nuevo gobierno, ambos partidos declararon que iban a eliminar el bandolerismo por medios políticos y sociales. Como Alberto Lleras y sus seguidores querían distinguirse de la anterior dictadura militar, hicieron énfasis en el rechazo de cualquier actividad represiva.⁶ Por eso el gobierno optó inicialmente por las Comisiones y por proyectos sociales. Se trató de la así llamada Comisión Especial de Rehabilitación, la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, así como diversos organismos de asistencia social y colaboración técnica, como por ejemplo Acción Comunal y los Equipos Polivalentes (Sánchez/Meertens 1983: 227).

⁶ Cf. *El Espectador*, 13 de junio de 1958.

Sin embargo, el alcance de las Comisiones era bastante limitado, debido a que se transformaron muy rápido en instrumentos del clientelismo rural. Así, por ejemplo, algunos gamonales regionales obtuvieron el control de los fondos destinados a la población civil y los distribuían entre sus propios seguidores. Según el sociólogo Alfredo Molano, la Comisión Investigadora sirvió al gobierno como una especie de “caballo de Troya”, de modo que sus miembros tenían que establecer contactos con los bandoleros para “promover la paz”, pero de hecho también proveían de informaciones al ejército. Esta combinación de medidas “blandas” con medidas “duras” a partir de 1959, hizo que una gran parte de los bandoleros se entregaron a la justicia, amparados por leyes de amnistía.

Las Comisiones de la Violencia servían casi exclusivamente para mejorar las condiciones materiales del campesinado empobrecido y sus miembros escribían amplios informes acerca de las condiciones de higiene, la vivienda y la alimentación. Desde el inicio, el gobierno dejaba claro que no deseaba ningún estudio profundo sobre las causas del conflicto. Por lo tanto, las Comisiones trabajaban –posiblemente sin darse cuenta– en la legitimación del Frente Nacional y no por una paz duradera. Así también lo recuerda uno de los integrantes de la Comisión Investigadora, el padre Germán Guzmán Campos:

Sin lugar a dudas estas motivaciones traducen esa gigantesca ingenuidad que trastrueca en virtud patriótica lo que es marrullera demagogia. En un contexto interpretativo posterior he encontrado dos respuestas: una, medularmente clasista y oligárquica: la Comisión se creó para buscar el retorno al estado de derecho, impidiendo la toma del poder por el pueblo. Es lo que se ha llamado ‘legitimación del Frente Nacional’. La otra respuesta es marxista: ve en la Comisión un instrumento más, utilizado por la clase en el poder para reproducirse y perpetuar su dominación a través del Estado (Guzmán Campos 1986: 353).

Algo parecido pasó con las leyes de amnistía emitidas el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 1958, cuyo fin era acabar con el bandolerismo.⁷ Según el presidente Lleras, a quien no le gustó la palabra “amnistía”, se trataba simplemente de una “suspensión de penas”, debido al hecho de que los decretos sólo eran válidos en algunos departamentos de Colombia.⁸ Además del objetivo oficial de terminar la guerra, las élites también pretendían borrar su propia culpa de la memoria histórica. En este sentido, les convenía que sólo los miembros de las bandas “políticas” tuvieran el derecho de integrarse nuevamente en la sociedad, mientras que los bandoleros “apolíticos” o “comunistas” seguían siendo perseguidos por el ejército.⁹

En la práctica, las leyes de amnistía fracasaron porque muchos de los victimarios de La Violencia no eran “políticos” en el sentido partidista, sino simplemente habían asesinado y desplazado por motivos económicos. Como el gobierno no había establecido ningún mecanismo de prueba, estos delincuentes no tenían mayor problema en declarar su filiación partidista. El decreto solamente preveía que los violentos tenían que solicitar la “suspensión de penas” directamente en la oficina del respectivo gobernador, el cual tenía el derecho de perdonar cualquier crimen ocurrido antes de 1959. Así, los decretos tam-

⁷ Véanse decreto 0328, 28 de noviembre de 1958, en Molano (1978: 161-165) y decreto 2582, 11 de diciembre de 1958, en Molano (1978: 166 s.).

⁸ Cf. *El Tiempo*, 21 de julio de 1959.

⁹ Véase decreto 0011, 25 de mayo de 1959, en Molano (1978: 167-169).

bién se volvieron una herramienta del clientelismo. En numerosos casos, los gobernadores departamentales hicieron uso de la medida para recompensar “lealtades” comprobadas durante La Violencia. Además, no pocos victimarios recibieron créditos estatales y tierras, con el fin de “integrarse” nuevamente en la sociedad. En algunos casos, los violentos incluso lograron legalizar a posteriori grandes territorios obtenidos de manera ilegal durante La Violencia (Molano 1978: 98 ss.)

Aparte de borrar su culpa histórica, las élites también tenían objetivos más sutiles al declarar las amnistías. Así, por ejemplo, creían necesario identificar algunos de los bandoleros como “rebeldes” que se habían opuesto a la dictadura militar, es decir, que estaban involucrados en una especie de “guerra justa”. Después de la amnistía estos guerrilleros estarían de nuevo unidos a su partido de origen: el Liberal. En un futuro cercano –de acuerdo con el cálculo de algunos políticos– podrían ser incluso fieles seguidores del sistema bipartidista, mientras que quienes negaban la “integración” debían ser perseguidos como “comunistas” y “enemigos de la nación”. Además de estas consideraciones, también había una razón más profana: las cárceles estaban llenas (Sánchez 1988).

Aunque los líderes políticos a nivel nacional tenían un interés sincero en apagar la llama de la contienda en el campo, muchos gamonales regionales no compartían esta visión. Al contrario, usaron las leyes de amnistía para recompensar a algunos de los criminales más temidos por sus “servicios a Dios y a la patria”, lo cual generó nuevo rencor y envidia entre los seguidores del partido opuesto (Sánchez 1988).

Por otra parte, muchas víctimas de La Violencia experimentaron las leyes de amnistía como otro golpe traumático y doloroso. En tales circunstancias no era fácil superar lo sufrido, sobre todo sin la aceptación de la culpa por parte de las élites. Sin el “perdón” de los victimarios, sin reparación material y simbólica, sin canales institucionalizados para discutir lo sucedido, los trabajos de la memoria y la rehabilitación de las víctimas estaban condenados al fracaso.¹⁰ Al igual que las Comisiones de la Violencia, las leyes de amnistía no fortalecieron la paz. A pesar del discurso oficial de “perdón y olvido” y una serie de decretos presidenciales para elevar el estándar de vida de la población rural, el gobierno no logró suprimir el trauma a fondo que dejó La Violencia. Como lo mostrarían los siguientes años con claridad, las “paz negociada” de la élites no duraría mucho.

Al creer que un conflicto que se había originado a raíz de diferencias políticas podría ser solucionado por medio de un acuerdo político, los políticos se habían equivocado. Después de que las leyes de amnistía perdieron su vigencia el 26 de julio de 1959, el nivel de violencia aumentó de nuevo y, bajo la influencia de la revolución cubana, tomó un rumbo más ideológico (Sánchez/Meertens 1983: 227).

Así como la guerra continuaría en otras formas y con otros actores, la memoria de La Violencia sobreviviría en partes de la población rural y –a causa del desplazamiento masivo desde los años cincuenta– también en los barrios populares de las ciudades. Por eso y debido también a la postura de las élites de no discutir abiertamente el pasado sangriento, algunos grupos de la sociedad civil –fragmentada pero existente– colocan hoy en día el tema de La Violencia en la agenda pública.

¹⁰ El aspecto de los “trabajos de la memoria” es profundizado en Jelin (2002).

Conclusiones

Para concluir, ¿es acertada la afirmación de Marco Palacios de que las imágenes básicas sobre La Violencia se forjaron durante la primera fase del Frente Nacional y de que se trataba en ese entonces de un “pacto de olvido”?

Sin lugar a duda, es reconocible el afán de la clase dirigente de llamar al olvido. En este sentido se puede decir que la política de los primeros años del Frente Nacional sigue teniendo efectos sobre nuestra manera de ver La Violencia, la cual ha tomado con los años un carácter borroso e indefinido para la mayoría de la gente. Sin embargo, no se trató nunca de un discurso elaborado, único y con un solo sentido. Siempre han existido voces críticas, incluso en la gran prensa y el congreso.

Así y todo, las escasas voces críticas de la época nunca fueron capaces de formular un discurso coherente, aunque el creciente número de comentarios en contra del Frente Nacional muestra que el oficialismo se encontraba algunas veces en la retirada. A pesar de esto, la afirmación revisionista de que los ensayistas e intelectuales de la época ha contribuido a la difusión del relato de una “guerra permanente”, como sostiene por ejemplo Eduardo Posada Carbó (2007: 51 ss. y 265-303), se justifica solamente en parte. También es preciso señalar que el número de posibles receptores de este relato nunca ha sido muy alto. Colombia fue y sigue siendo un país con pocos lectores (Arnove 1980: 385-400; Ministerio de Cultura 2006). En la televisión, el medio de comunicación más utilizado por los colombianos, encontramos hoy en día más bien lo contrario de una versión crítica, puesto que el acelerado proceso de concentración de los medios ha acercado a los creadores de la “opinión pública” –sea cual sea su definición– aún más al oficialismo (Kusche 1997: 585-614; Hennecke 2006). En vez del relato de una “guerra permanente” el telespectador de hoy se enfrenta a diario con un discurso patriótico y neoliberal, difundido para encubrir las raíces históricas, socioeconómicas y políticas del conflicto. En la actualidad, el viejo dualismo de liberales vs. conservadores ha sido reemplazado por el nuevo dualismo de “colombianos buenos” vs. “minorías antipatrióticas”, sin que se mencione la procedencia de este fenómeno. Visto desde una perspectiva histórica, esto no es nada nuevo en Colombia, donde el poder mediático de los “presidentes letrados” del siglo XIX ha sobrevivido hasta nuestros días. Debido al carácter manipulador, dependiente y politizado de los medios de comunicación de masas, la centenaria tradición de una “prensa libre” representa un legado bastante ambiguo. Considerando esto, así como el alto grado de autocensura en todos los medios, creo que la persistencia del relato de una “guerra permanente” tiene que ver más con la memoria comunicativa de los pequeños grupos sociales, la cual se deriva principalmente de la tradición oral, y no tanto de los escritos de algunos columnistas, ensayistas y novelistas.¹¹

¹¹ Según Maurice Halbwachs, el creador del concepto de la “memoria colectiva”, ésta es un fenómeno esencialmente social y de duración mediana (80 a 100 años). Cuando un grupo social pequeño, es decir una comunidad fácilmente reconocible, de pocos miembros y de dos o tres generaciones, deja de existir, también deja de existir la memoria colectiva. Teniendo en cuenta el actual uso inflacionario e impreciso del término, tal vez valga la pena reorientarse hacia la idea original. Para describir la elevación de la memoria a nivel institucional (monumentos, museos, conmemoraciones, etc.), Halbwachs se refiere a la “memoria histórica” (véase Halbwachs 2004).

En consecuencia, si el relato de los intelectuales críticos ha sido tan débil, ¿se puede afirmar lo mismo de las versiones oficialistas? En lo tocante a esta pregunta pienso que las pocas opiniones contrarias al discurso del *mainstream* no han dejado muchas huellas en la memoria histórica. Tal vez algunos disidentes, como el ya citado Eduardo Caballero Calderón –duramente criticado por Posada Carbó (2007: 219-224)– hayan exagerado en sus juicios, y al proponer la existencia de una “cultura de la violencia” también mostraron una actitud paternalista y de desprecio hacia los estratos bajos. Sin embargo, el mismo Posada Carbó admite que desconoce el impacto que hayan dejado los libros y columnas de Caballero Calderón. Aquí está el verdadero “problema”: si no podemos hablar hoy en día de medios críticos e imparciales ni de la difusión total de un imaginario negativo de la nacionalidad colombiana, como supuestamente lo difunden Fernando Vallejo, William Ospina, Alfredo Molano, Antonio Caballero, Arturo Alape, entre otros, lo podemos afirmar aún menos para la época del Frente Nacional. En los dieciséis años del pacto bipartidista, la naciente clase media y algunos miembros de la élite fueron los únicos receptores de posibles relatos críticos. Sin embargo, con la llegada de la televisión en los años cincuenta y su posterior popularización a partir de los años sesenta y setenta, la visión oficialista del pasado siguió teniendo más cobertura que la alternativa crítica.

El último síntoma de la hegemonía del discurso oficialista es la casi total ausencia de una memoria histórica acerca de La Violencia. Así, por ejemplo, es muy dicente que la exposición permanente en el Museo Nacional de Colombia termine con el 9 de abril de 1948. Todavía no existe la categoría de “historia contemporánea” en el espacio público.

A mi modo de ver, la posición revisionista de percibir Colombia como un país de “larga tradición democrática” o una “sociedad abierta” es un retroceso. Los seguidores de esta corriente repiten los errores de la vieja historiografía oficialista, parten de un ideal democrático minimalista, elitista y meramente funcional e ignoran otros factores claves para el entendimiento de la génesis de la violencia. En oposición a estas tendencias quisiera subrayar que La Violencia fue mucho más que un conflicto político. Su evolución obedeció precisamente a la falta de políticas sociales, al exclusivismo político y a los conflictos de distribución. Desgraciadamente, en tantas ocasiones del pasado y aún en el presente, las élites prefirieron el olvido a la confrontación de las causas del conflicto. Es así como la “paz”, nacida de amnistías e indultos, carece de sustentabilidad.

En este sentido, como decía el gran escritor y cronista Arturo Alape en una de las últimas entrevistas antes de su muerte, el discurso oficialista acerca de la historia del siglo XX sigue aún vigente.¹² Seguramente, a partir de 2010, cuando se celebrarán los “padres de la patria” en el marco del Bicentenario, uno de los capítulos más importantes en la historia contemporánea, tal vez el que más nos pueda decir sobre el origen del conflicto actual, seguirá en la oscuridad.

¹² Véase *El Tiempo*, 26 de agosto de 2006.

Bibliografía

- Acevedo Carmona, Darío (2003): “El Pacto de Benidorm o el olvido como antídoto para conjurar los fantasmas del odio y de la sangre”. En: Medina, Medófilo/Sánchez, Efraín (eds.): *Tiempos de Paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, pp. 229-236.
- Aguilar Fernández, Paloma (1996): *Memoria y olvido de la Guerra Civil española*. Madrid: Alianza.
- Arrove, Robert (1980): “Education Policies of the National Front”. En: Berry, Albert *et al.* (eds.): *Politics of Compromise. Coalition Government in Colombia*. New Brunswick: Transaction Books, pp. 381-411.
- Assmann, Aleida/Frevert, Ute (1999): *Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945*. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Bernecker, Walther/Brinkmann, Sören (2006): *Kampf der Erinnerungen: Der Spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft, 1936-2006*. Nettersheim: Verlag Graswurzelrevolution.
- Blair Trujillo, Elsa *et al.* (2003): *Imágenes del otro en la(s) violencia(s) colombianas: por una antropología de la violencia. Informe final*. Medellín: INER.
- Caballero, Antonio (1986): “Prólogo”. En: Behar, Olga (ed.): *Las guerras de la paz*. Bogotá: Planeta, pp. 7-9.
- Cámara de Representantes (ed.) (1958-1962): *Anales del Congreso*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Gómez Cardona, Santiago (2003): *La historia narrada, relatos de violencia en el Quindío*. Medellín: Universidad de Antioquia (tesis de grado).
- Gómez de Baruffol, Fanny Cecilia (1999): *Ciencias Sociales 5: guía de recursos*. Bogotá: Santillana.
- Guzmán Campos, Germán (1986): “Reflexión crítica sobre el libro ‘La Violencia en Colombia’”. En: Sánchez, Gonzalo/Ricardo Peñaranda (eds.): *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Bogotá: CEREC, pp. 349-366.
- Guzmán Campos, Germán *et al.* (1962/64): *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. 2 vols. Bogotá: Tercer Mundo.
- Halbwachs, Maurice (2004): *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias.
- Hennecke, Angelika (2006): *Zwischen Faszination und Gewalt: Kolumbien – unser gemeinsamer Nenner*. Frankfurt/M.: Peter Lang.
- Henao, Jesús María/Arrubla, Gerardo (1967): *Historia de Colombia para la enseñanza secundaria*. Bogotá: Librería Voluntad.
- Jelin, Elizabeth (2002): *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- König, Hans-Joachim (1994): “Los caballeros andantes del patriotismo. La actitud de la Academia Nacional de la Historia Colombiana frente a los procesos de cambio social”. En: *Historia y Espacio*, 15, pp. 101-121.
- Kusche, Dagmar (1997): “Massenmedien in Kolumbien”. En: Altmann, Werner *et al.* (eds.): *Kolumbien heute*. Frankfurt/M.: Vervuert, pp. 585-614.
- Lavacude Parra, Kenny (1999): *Ciencias Sociales 9*. Bogotá: Santillana.
- Lleras, Alberto (1960): *Sus mejores páginas*. Bogotá: Compañía Grancolombiana.
- Molano, Alfredo (1978): *Amnistía y violencia*. Bogotá: CINEP.
- Melo, Jorge Orlando/Díaz Rivero, Gonzalo (1989): *Raíces. Quinto curso de enseñanza básica primera*. Bogotá: Libros & Libres.
- Ministerio de Cultura (2006): *Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia*. Bogotá: Fundalectura.
- Palacios, Marco (2003): *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*. Bogotá: Norma.
- Pécaut, Daniel (2003): *Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión*. Medellín: Hombre Nuevo.

- Pizarro, Eduardo (2004): *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Norma.
- Posada Carbó, Eduardo (2007): *La nación soñada*. Bogotá: Norma.
- Oquist, Paul (1978): *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.
- Samacá Prieto, Nubia Elcy (2000): *Ciencias sociales activas 5*. Bogotá: Santillana.
- Sánchez, Gonzalo (1988): *Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional*. En: <<http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/analisispolitico/ap4.pdf>> (27.01.2008).
- (2006): *Guerras, memoria e historia*. Medellín: La Carreta Histórica.
- Sánchez, Gonzalo/Meertens, Donny (1983): *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia*. Bogotá: El Áncora.
- Uribe, María Victoria (2004): *Antropología de la inhumanidad*. Bogotá: Norma.
- Vargas Poo, Martín Eduardo *et al.* (2001): *Espacios 9: historia y geografía*. Bogotá: Norma.
- Wolfrum, Edgar (1999): *Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.